

**SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN**

2022 NOV 24 PM 10:00

**Demanda de acción de
inconstitucionalidad, promovida por el
Partido Político Nueva Alianza Oaxaca.**

**OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA**

**Ministros que integran el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.**

*Pino Suárez 2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06065, Ciudad de México.*

La que suscribe, **ANGÉLICA JUÁREZ PÉREZ** Presidenta del órgano directivo del Partido Político Nueva Alianza Oaxaca, personalidad que acredito en términos de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Estatuto Nueva Alianza Oaxaca, carácter debidamente reconocido ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; designo como delegado en términos del artículo 59, en relación con el 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a Héctor Eduardo Ruíz Serrano [REDACTED] asimismo, conforme al artículo 4° de la invocada Ley Reglamentaria, autorizo para oír notificaciones a los licenciados Donají Cruz García y Carlos Alfredo Hernández Suarez, así como domicilio para oír y recibir acuerdos y notificaciones el ubicado en [REDACTED]

debido respeto comparezco y expongo:

De conformidad con lo dispuesto en el inciso f), de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y relativos de la Ley Reglamentaria, dentro del plazo establecido en el segundo párrafo, del precepto constitucional y fracción citados y 60, de la Ley Reglamentaria, promuevo **DEMANDA DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** en los términos que a continuación se expondrán:

En acatamiento al artículo 61, de la Ley Reglamentaria, manifiesto:

I. Nombre y firma del promovente:

Angélica Juárez Pérez Presidenta del Órgano directivo del Partido Político Nueva Alianza Oaxaca, personalidad que acredito en términos de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Estatuto Nueva Alianza Oaxaca. Firma al calce del documento.

II. Los órganos legislativos y ejecutivos que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas:

A. Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Oaxaca.

B. Órgano Ejecutivo: Gobernador
Constitucional del Estado de Oaxaca.

III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:

Decreto numero 698.- mediante el cual reforma el artículo transitorio tercero del decreto numero 1511 expedido el 28 de mayo de 2020 por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y

Soberano de Oaxaca y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 30 de mayo del año 2020; que reformó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en Materia de Paridad, Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género.

IV. Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...)

Artículo 2º, fracción VII, apartado A: “Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.”

“Artículo 4°. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

...

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

Artículo 115. Párrafo primero de la fracción 1, “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”

V. Derechos fundamentales que se estiman violados.

- Violación al principio de progresividad y no regresividad.
- Derecho a la igualdad sustantiva
- Obligación de garantía del Estado.

VI. Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de Decreto numero 698.- mediante el cual reforma el artículo transitorio tercero del decreto numero 1511 expedido el 28 de mayo de 2020 por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el día 25 de octubre de 2022.

VII. Oportunidad en la promoción.

Acorde al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación de la norma impugnada.

En el caso, la norma cuya declaración de invalidez se solicita fue

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el día 25 de octubre de 2022, por lo que el plazo para presentar la acción corre del miércoles 26 de octubre de 2022, **al jueves 24 de octubre de 2022.** **Por tanto, al promoverse el día de hoy,** ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción es oportuna. Como lo establece el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las acciones de inconstitucional podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación.

Cabe hacer mención que somos mujeres de diferentes comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos internos o indígenas, en nuestras comunidades no tenemos la oportunidad de informarnos de manera oportuna de las reformas de leyes que se llevan a cabo en los congresos estatales y federales, esto de la reforma del decreto que se impugna, nos enteramos en las asambleas comunitarias de elección de concejales en donde nuestras autoridades hicieron mención sobre la reforma de paridad de género, que se aplicará de manera gradual, esto después de varios días de su publicación en el periódico oficial, por esa razón nos asesoramos de profesionistas expertos en el tema que se podía hacer al respecto, quienes nos informaron que con la reforma transgreden los principios de equidad de género, progresividad, vulnera de manera sistemática, flagrante y directa los principios de equidad de género reconocidos en la Constituciones Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Oaxaca, Instrumentos Internacionales en los que México es parte, así como la

Normativa Electoral aplicable.

VIII. Legitimación activa del partido político con registro en una entidad federativa, para promover la acción de inconstitucionalidad.

El artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone que los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro, tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte y, respecto de las legislaciones federales y de las entidades federativas, en los siguientes términos:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:(...)

*II. **De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.***

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...)

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; (...).”

Conforme al citado precepto Constitucional, acudo a este Alto Tribunal en mi calidad de Presidenta del Partido Político Nueva Alianza Oaxaca, en los términos del primer párrafo, del artículo 11, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad, conforme al diverso 59, del mismo ordenamiento legal.

Dicha representación y facultades, se encuentran previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto Nueva Alianza Oaxaca,

INTRODUCCIÓN.

Como es un hecho notorio, las reformas del catorce de mayo del año 2019, establecieron la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, este esquema debe ser igual para los estados e integración de ayuntamientos.

Con dicha reforma se elevó la protección de estos derechos a rango constitucional, buscando armonizar el contenido de la Constitución Federal con los tratados internacionales firmados y ratificados por México, que reconocen la observancia del principio de paridad en la elección de representantes de los municipios con población indígena, además, los municipios deben de conformar sus cabildos bajo el principio de paridad de género, la ciudadanía tiene el derecho de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, así como en los diferentes niveles y órdenes de gobierno.

Así, para el treinta y uno de mayo, quince congresos locales aprobaron por unanimidad la minuta de reforma constitucional en materia de Paridad de Género en todos los cargos públicos de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de Gobierno, los cuales son Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Ciudad de México, **Oaxaca** y Durango.

Por lo que, el cinco de junio de 2019 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma, puesto que esta obtuvo el voto aprobatorio de 21 congresos locales, la reforma fue publicada el seis de junio en el Diario Oficial de la Federación.

En ese sentido, la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el 28 de mayo de 2022, expidió el decreto número 1511 y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 30 de mayo del año 2020; que reformó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en Materia de Paridad, Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género. En ese sentido, se estableció en su transitorio Tercero, el tiempo en que dichas reformas lograrían su cabal cumplimiento:

“TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. - El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dentro de los 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, hará la modificación necesaria a su reglamento y manuales.

*TERCERO. - Para el Cumplimiento de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, **respecto de la paridad en sistemas normativos internos o indígenas, esta será Gradual, logrando su cabal cumplimiento en el año 2023.***

Sin embargo, con la semana pasada en diversas datas tuvimos conocimiento que la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, publicó en el periódico oficial del estado de Oaxaca el 25 de octubre de 2022, el Decreto número 698 en que reformó el artículo TRANSITORIO TERCERO del decreto número 1511 antes referido. Para quedar como sigue;

“TRANSITORIOS

PRIMERO. ...

SEGUNDO. ...

*TERCERO. Para el Cumplimiento de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, respecto de la paridad en sistemas normativos internos o indígenas, **esta será gradual.***

CUARTO. ...

QUINTO. ...”

“

Lo anterior, resulta ser una transgresión directa a la Constitución y a los derechos fundamentales, así como a la protección efectiva del derecho de igualdad, al principio de progresividad humanos de las mujeres Oaxaqueñas pertenecientes a municipios que se rigen bajo el régimen de sistemas normativos indígenas, ya que en el mandato

constitucional se estableció el principio de no regresión para los derechos político-electorales que tutelan a la ciudadanía de nuestro país.

Por lo que es preciso establecer que se han sentado precedentes al principio de progresividad en los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 35, fracción VIII, punto 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de los derechos humanos, incluidos los político-electorales.

Dicho esto, el criterio jurisprudencial, por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, 28/2015, de rubro “Principio de progresividad “Principio de progresividad. Vertientes en los derechos político-electorales”, estableció un mandato de no regresión para los derechos político-electorales que tutelan a la ciudadanía de nuestro país.

Asimismo, en el criterio jurisprudencial que se comenta, se precisó que los derechos fundamentales tienen una proyección en dos vertientes:

- 1) Reconociendo la prohibición de regresividad respecto de los derechos humanos, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías.
- 2) Obligando al Estado a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación.

Ahora, atendiendo a dicho principio, constituye un principio

interpretativo que establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al solo poder aumentar, progresan gradualmente; de modo que la protección que brindan cada vez tiene un alcance mayor.

MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos, 1, 2º fracción VII, apartada A, 4 º, 35, fracción VIII punto 3 y 115 consagran lo siguiente:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...)"

Artículo 2º, fracción VII, apartado A: "Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables."

“Artículo 4°. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

...

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

Artículo 115. Párrafo primero de la fracción 1, “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”

Principales Instrumentos Internacionales En Materia De Igualdad De Género

I. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

“(…)

Artículo 21.-

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. (...)”

II. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (1966).

“(…)

Parte II

Artículo 2: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. (...)

Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

III. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER (1953).

“Reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por conducto de representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país; y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos; (...)

Artículo 1. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo 2. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo 3. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

IV. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES (CEDAW) (1979)

El artículo 3, dispone que los Estados parte tomarán todas las

medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en todas las esferas y, en particular, en la política, social, económica y cultural, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.

Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

Artículo 8. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales”.

X. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” (1969).

“(…)

Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con

finés ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. (...)"

XI. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS A LA MUJER

"Considerando: Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspiradas en elevados principios de justicia, han concedido los derechos políticos a la mujer; Que ha sido una aspiración reiterada de la comunidad americana equilibrar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los derechos políticos; Que la mujer tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre; Que la Mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre; Que el principio de igualdad de derechos humanos de hombres y mujeres está contenido en la Carta de las Naciones

Unidas”; (...)

XII. PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (ASAMBLEA 2015).

“Finalmente, a partir del enfoque de paridad se busca atender la sub-representación de las mujeres en los espacios de participación política y toma de decisiones del ámbito local. Lo cual resulta acorde con las obligaciones del Estado mexicano para hacer efectiva la igualdad de todas las personas en el ejercicio de sus derechos. Así como se establece en la Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria, “lograr la Paridad en todos los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, en toda la estructura del Estado, así como su paulatino traslado a toda la sociedad. La paridad constituye una meta de los Estados inclusivos como reconocimiento expreso del hecho de que la humanidad está integrada por una representación 50/50 de mujeres y hombres”

12. Que en las Constituciones Políticas y en las Leyes o Códigos electorales de los estados que conforman la federación, así como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en su respectivo Código Electoral, se reconoce el principio de paridad y alternancia entre los géneros para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

XIII. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

El artículo 24 dispone que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.

XIV. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ).

El artículo 4, incisos f) y j), dispone que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual protección ante la ley, así como a tener igualdad de acceso a las

funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos.

XV. Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Determina alentar los esfuerzos sostenidos para aumentar la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, con un enfoque intercultural y étnico racial, afianzando la presencia de mujeres en todos los poderes del Estado y niveles y ámbitos de gobierno, garantizar la protección de los derechos de las mujeres que participan en política y condenar la violencia política.

XVI. Observación General del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Artículo 3. Garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres:

Artículo 29. El derecho a participar en la vida pública no se materializa plenamente y en condiciones de igualdad en todas partes. Los Estados parte deberán cerciorarse de que la ley garantice a la mujer los derechos contenidos en el artículo 25 en pie de igualdad con el hombre y adoptar medidas eficaces y positivas, incluidas las medidas necesarias de discriminación inversa, para promover y asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos.

XVII. Recomendación General N.º 23 relativa al artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

El artículo 7 establece que los Estados parte aceptan tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y asegurar que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligación especificada en este artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del párrafo. La vida política y pública de un país es un concepto amplio. Se refiere

al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. El término abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución de la política a los niveles internacional, nacional, regional y local.

El artículo 2 de la **Recomendación General N.º 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer** señala la obligación de cumplimiento de los Estados parte de facilitar la plena efectividad de los derechos de las mujeres y tomar medidas para ello. Los derechos humanos de las mujeres deben hacerse efectivos mediante la promoción de la igualdad de facto o sustantiva por todos los medios apropiados, entre ellos la adopción de políticas y programas concretos y efectivos orientados a mejorar la posición de las mujeres y lograr esa igualdad de facto, incluida, cuando proceda, la adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la Recomendación General N.º 25.

XVIII. Comité CEDAW en su Recomendación General número 35 de 26 de julio de 2017.

Recomienda a los Estados Parte adoptar y aplicar medidas legislativas como **preventivas adecuadas para abordar** las causas subyacentes de la violencia por razón de género contra las mujeres, en particular las actitudes patriarcales, los estereotipos, la desigualdad en la familia y **el incumplimiento o la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres; así como promover el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres.**

Línea jurisprudencial.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido las siguientes jurisprudencias en relación al tema de paridad:

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que delinear los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.

PARIDAD DE GÉNERO Y ACCIONES AFIRMATIVAS. PUEDEN COEXISTIR EN LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS, CUANDO BENEFICIEN A LAS MUJERES.

—De conformidad con los artículos 1°, párrafo quinto, 4°, párrafo primero, 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así como 5, fracción I, y 12, fracción V, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se concluye que las acciones afirmativas son medidas temporales que permiten acelerar la presencia, en los espacios públicos y de toma de decisiones, de quienes forman parte de sectores sociales subrepresentados o en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la paridad de género es un principio rector permanente que rige en la integración, entre otros, de los institutos y los tribunales electorales locales. Sin embargo, tanto las acciones afirmativas como el principio de paridad tienen como fin el logro de la igualdad sustantiva o de facto. Por tanto, en determinados contextos, ambos pueden coexistir en cualquier escenario de integración de órganos colegiados, cuando benefician a las mujeres y no se ponga en riesgo la integración paritaria de aquellos.

Jurisprudencia 11/2018

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA

LAS MUJERES. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.

Jurisprudencia 9/2021

PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.—De una interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, en observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos generales que estime necesarios para hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como para desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos.

Ahora, del marco jurídico antes citado, se advierte que el decreto cuya declaración de invalidez se solicita fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el día 25 de octubre de 2022, **es contrario a los derechos humanos de las mujeres pertenecientes a las comunidades que se rigen electoralmente por sistema normativo interno o indígena, como se precisa en el apartado subsecuente.**

IX. Conceptos de invalidez.

PRIMERO. La reforma constitucional establecida en los artículos 2º, Apartado A, fracción VII, 35, fracción II, 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, 53, párrafo segundo, 56, párrafo segundo y 115, fracción I, de la CPEUM, a modo de principio y regla establece un mandato irreductible de paridad en la postulación e integración de los cargos titulares del poder Ejecutivo Federal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de los Poderes

Ejecutivos locales, Congresos Estatales, Ayuntamientos, Presidencias Municipales, Órganos Constitucionales Autónomos, así como poderes públicos y cargos del servicio público renovados e integrados por vías distintas a las elecciones democráticas, al ser incorporada como cláusula constitucional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como eje articulador también el derecho humano de igualdad formal y material entre mujeres y hombres que se encuentra establecido en el artículo 4º, párrafo primero de la Constitución federal por tratarse de un mandato genérico con efectos a todas y cada una de las diferentes relaciones en las que interactúan mujeres y hombres, y que tiene como propósito superar y erradicar la desigualdad histórica de las mujeres frente a los hombres en todos los ámbitos de la vida entre éstos, en el aspecto económico, político, social y cultural, mediante la creación de leyes y políticas públicas —incluyendo los órganos constitucionales autónomos y los órganos judiciales—, en cuanto a la obligación de integrar la perspectiva de igualdad de género, que debe desarrollarse en todos los niveles de gobierno y por todos los órganos del poder público e incluso replicarse en las familias, en el trabajo, así como en la vida política y social.

El citado marco normativo establece la integración de los órganos del Estado mexicano a la observancia del principio de paridad de género en su conformación, esto es, para todos los cargos de elección popular deben observar la paridad de género, ya sea que se trate de la

integración de órganos colegiados o de cargos unipersonales.

En ese sentido, la paridad de género es un principio constitucional y, por tanto, un mandato de optimización que debe ser aplicado de forma congruente y observarse en la aplicación del sistema representativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, en relación con el 1º, 4º y 133 de la Constitución.

El principio de paridad es un eje rector en el ejercicio de los derechos de votar y ser votado, así como ejercer el cargo. Es un mandato de optimización que permea en todo el ámbito jurídico del Estado mexicano y su respeto se debe garantizar en cualquier momento.

La reforma constitucional denominada “paridad en todo” estableció una serie de parámetros de actuación para las autoridades del país, a fin de propiciar, entre otros aspectos, que los cargos de elección popular se fijen mediante la postulación paritaria de candidaturas y, por supuesto, en que la integración de órganos estatales se haga con base a ese principio.

Por ello, el principio de paridad en modo alguno se agota con el paso del tiempo, ni mucho menos porque un determinado órgano se decidió integrar de cierta manera para un periodo específico.

Al contrario, el principio de paridad exige que, si en la actual integración de un órgano es posible lograr la reparación de ese

principio, entonces se ordene realizar todos los actos encaminados a tal propósito.

O bien, en caso de ausencia de condiciones para lograr la paridad en el presente, se ordene realizar todos los actos necesarios para que, en futuras integraciones, se cumpla ese principio.

Es por ello que existen las condiciones para reparar la posible violación al principio de paridad. O bien, en caso de que sean necesarios elementos para tal fin, entonces es posible ordenar que se implementen hacia futuro los elementos necesarios para que, en futuras integraciones, se cumpla el citado principio, es por ello que se tiene que conocer el fondo de la controversia, porque de ser el caso, es posible ordenar la reparación actual del derecho vulnerado y en todo caso, ordenar que se haga a futuro.

Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas sobre derechos humanos se deben interpretar de la manera más favorable y para la protección más amplia.

En cuanto al principio de paridad y el derecho de las mujeres al acceso al poder público en condiciones de igualdad, implican el establecimiento de condiciones propicias para que el mayor número de mujeres integren los órganos de elección popular.

Ello desde una perspectiva de paridad como mandato de optimización, con el propósito de implementar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar una participación mayor de las mujeres en los órganos estatales.

Cabe señalar que en diversos tratados se establecen medidas encaminadas a proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como a lograr la participación en la vida política del país de esta, en condiciones de igualdad.

Así, con base en la normativa constitucional y convencional, el principio de paridad debe permear en todos los ámbitos del Estado, motivo por el cual todas las autoridades estatales deben establecer las medidas mediante las cuales se garanticen los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad.

En materia electoral, así como en el acceso y desempeño de los cargos electos popularmente, el principio de paridad significa diversas garantías en torno a los derechos político-electorales de las mujeres, entre otras: a) votar y ser votadas en condiciones de igualdad; b) acceder y desempeñar los cargos públicos en las mismas condiciones que los hombres; c) integrar los órganos estatales de tal manera que tengan una representación del 50% de su género; d) eliminar cualquier forma de discriminación o barreras que limiten el ejercicio de los derechos político-electorales.

En ese sentido, es necesario que la legislatura local junto con el Instituto Electoral local, cumplan con su obligación de realizar las acciones necesarias para garantizar el principio de paridad sustantiva en los procesos electorales futuros, en sistemas normativos indígenas.

Ahora, para establecer el alcance de paridad de género es necesario atender las reglas específicas previstas en la normativa aplicable y armonizarlas con los demás principios, reglas y derechos fundamentales que rigen el sistema electoral respectivo, por lo que debe hacerse una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad que no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido las siguientes jurisprudencias en relación al tema de paridad:

“Jurisprudencia 6/2015

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio pro persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno.

Jurisprudencia 9/2021

PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LAS MUJERES AL ACCESO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD.—

De una interpretación sistemática de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, párrafo 1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, incisos f) y j), y 6, inciso a), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, párrafo 1, y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que toda autoridad administrativa electoral, en observancia de su obligación de garantizar el derecho de las mujeres al acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, tiene la facultad de adoptar los lineamientos generales que estime necesarios para hacer efectivo y concretar el principio de paridad de género, así como para desarrollar, instrumentar y asegurar el cumplimiento de los preceptos.”

La citada reforma es en contra del principio de no regresión, esto por ser contrario de los avances previamente logrados, lo señalado en párrafos anteriores sobre la paridad de género.

Mientras que el principio de progresividad el Estado se obliga a tomar acciones para garantizar, proteger y promover los derechos; bajo el principio de no regresión el Estado se obliga a ser omiso en relación con medidas contrarias al avance logrado en los derechos, a ser omisas en medidas regresivas. La expectativa en la progresividad es de acción, la expectativa en la no regresión es de omisión.

En conclusión, el decreto impugnado es discriminatorio y contrario al principio de progresividad y no regresión, pues de manera arbitraria e injusta limita la posibilidad que se materialicen las reformas constitucionales en materia de paridad de género, como un derecho humano, pues dicha modificación al Transitorio Tercero limita la materialización de la reforma en pro de las mujeres, toda vez que la expresión de *“Para el Cumplimiento de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, respecto de la paridad en sistemas normativos internos o indígenas, esta será gradual.”* **Denota un lapso de tiempo indeterminado, lo que en esencia se cuestiona el periodo que debe transcurrir para que se dé cabal cumplimiento a las referidas reformas.**

En consecuencia, a juicio de este partido político, el decreto impugnado debe considerarse transgresor de diversos derechos humanos, particularmente de los reconocidos a favor de las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, **por resultar una medida injustificada, cuya vigencia provoca un retroceso en los derechos**

adquiridos de las mujeres y, por lo tanto, debe ser expulsada del orden jurídico de la entidad por resultar inconstitucional.

SEGUNDO. El contenido del Artículo Transitorio Tercero, del Decreto 698, expedido por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, **vulnera el principio de progresividad consagrado en el artículo 1º primer y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,** debido a que incumple la prohibición de regresividad exigida en nuestra Carta Magna, lo anterior debido a que el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos.

Lo anterior tiene verificativo debido a que el contenido del Artículo Tercero Transitorio reformado, restringe y elimina la paridad efectiva en los sistemas normativos indígenas o internos, como anteriormente contemplaba la ley, el eliminar la temporalidad impuesta por la anterior legislatura implica limitar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres que viven y pertenecen a comunidades que se rigen electoralmente por sistemas normativos indígenas, toda vez que el concepto de gradualidad que impone sin más no establece garantías mínimas para su cumplimiento efectivo.

Es así, pues la transgresión al principio de progresividad, en su ámbito materialmente legislativo, aplicada al caso se origina no sólo por la

emisión de normas regresivas, como lo es en sí misma la reforma al artículo tercero transitorio, sino también por la situación de regresividad que conlleva la supresión o modificación de preceptos legales que se relacionan con prerrogativas inherentes al ser humano y que, desde luego, el Estado se encuentra obligado a promover, respetar, proteger y garantizar, como lo es eliminar la garantía del cumplimiento efectivo del principio de paridad en los sistemas normativos indígenas, en específico lo correspondiente imponer un término hasta el año 2023 para su cabal cumplimiento.

El artículo 1° de la Constitución Federal reconoce expresamente el principio de progresividad, al señalar que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos "de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

El principio de progresividad es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por otro lado, favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección.

Por tanto, el principio de progresividad exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar

gradualmente el grado de promoción, respeto, protección y garantía de esas prerrogativas fundamentales, y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de las personas que se someten al orden jurídico del Estado Mexicano.

Conforme a lo anterior, es dable colegir que existirá una violación al principio de progresividad cuando el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad a los derechos humanos, o bien, una vez adoptadas tales medidas, exista una regresión -sea o no deliberada- en el avance del disfrute y protección de tales derechos, como es el caso de la norma que se tilda de inconstitucional.

El contenido del artículo tercero transitorio que se denuncia limita el ejercicio pleno de los derechos político electorales de las mujeres que viven y se desarrollan en sistemas normativos indígenas puesto que la norma anterior exigía un cumplimiento efectivo del principio de paridad instando a las autoridades de las comunidades que se rigen por estas normas, la integración plena de la mujer en las actividades políticas y el ejercicio de cargos públicos que le permitieran participar en la toma de decisiones políticas, sin embargo la reforma elimina esa garantía otorgada a favor de las mujeres y contrario a ello solo adopta para el cumplimiento del principio de paridad el termino gradual sin considerar

medidas efectivas para su cumplimiento a corto, mediano o largo plazo.

Ahora, es importante analizar si el precepto legal que se impugna y denuncia inconstitucional transgrede e implica una clara vulneración al principio constitucional de progresividad, por ende, sirve conocer la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de este Tribunal en la tesis número 2a./J. 41/2017 (10a.), visible en la página seiscientos treinta y cuatro, del Libro 42 Tomo I, mayo de dos mil diecisiete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

“PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO. El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de esta última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el ejercicio de un derecho humano no necesariamente es sinónimo de vulneración al principio referido, pues para determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II) genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada.”

Conforme a lo antes citado, es pertinente analizar si el contenido del Artículo Tercero Transitorio reformado por medio del decreto 698, emitido por la Legislatura actual del Estado de Oaxaca viola el principio de progresividad atendiendo si primero, el acto legislativo tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de los derechos político electorales de las mujeres que viven y son parte de comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas; y segundo, si el acto legislativo genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, en este caso el principio de paridad con la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

Conforme a lo anterior, el acto legislativo no incrementa en ningún sentido el grado de tutela de los derechos político-electorales de las mujeres que viven y son parte de comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas, **lo anterior es así debido a que eliminó el cumplimiento efectivo del principio de paridad sin establecer metas definidas a corto, mediano y largo plazo**, así como también vincula al OPLE local como autoridad administrativa para vigilar el cumplimiento efectivo de la paridad a favor de las mujeres, **es decir eliminó una garantía de cumplimiento, desvincula a las autoridades que se rigen electoralmente por sistemas normativos indígenas de la obligación de cumplir el principio de paridad y además impone al IEEPCO la obligación de vigilar que se cumpla el principio de paridad.**

Como se advierte en ningún sentido se aumentó el grado de tutela a favor de las mujeres, contrario a ello se eliminó una garantía existente a su favor para que se aplicara de manera efectiva el principio de paridad y por ende se deja en incertidumbre el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Ahora, respecto si se genera un equilibrio razonable entre dos derechos en controversia como puede ser el principio de paridad y el principio de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, no se trata de derechos en pugna sino de criterios complementarios que es indispensable se armonicen en los sistemas normativos indígenas, en ningún momento el acto legislativo protege ambos, contrario a ello primigenia la libre determinación por encima de la paridad, corroborando la regresividad de la medida.

Si ya se han emitido derechos y/o garantías a favor de las mujeres en los sistemas normativos indígenas, lo adecuado es que se preserven hasta que se cumpla de manera efectiva el principio de paridad para combatir un rezago histórico y la inaccesibilidad al ejercicio de sus derechos político electorales, sirve para apoyar lo antes expresado la jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Tribunal en la tesis número P./J. 1/2020 (10a.), visible en la página quince, del Libro 79, Tomo I, octubre de dos mil veinte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

“PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE

LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE VERTICAL COMO EN LA HORIZONTAL.

Hechos: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegaron a conclusiones diversas al plantearse si existe mandato constitucional para garantizar la paridad de género, en su vertiente horizontal para la conformación de Ayuntamientos. Mientras que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no existía una obligación constitucional de prever la paridad horizontal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales tienen un deber constitucional y convencional de garantizar la paridad de género horizontal en el registro de sus planillas.

Criterio jurídico: Existe mandato constitucional para garantizar el principio de paridad de género en la conformación de los Ayuntamientos, como deriva del texto expreso de los artículos 1o., párrafos primero y tercero; 4o., primer párrafo; y 41, fracción I, de la Constitución Federal, así como de los diversos II y III, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 4, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Por ende, en la configuración de cargos de elección popular impera una obligación de observar el principio de paridad de género, lo que provoca instrumentar mecanismos para reducir las desigualdades entre las mujeres y los hombres; y, fundamentalmente, para lograr una participación plena y efectiva de aquéllas en todos los ámbitos en los que se desarrolla el servicio público.

Justificación: Una lectura integral y funcional del sistema normativo del Estado Mexicano conduce a razonar que existe mandato para prever la paridad de género horizontal en la integración de los Ayuntamientos, ya que ello constituye una medida para hacer efectiva la igualdad entre la mujer y el hombre. No es obstáculo que la Constitución no aluda a paridad vertical y horizontal, toda vez que es suficiente con el reconocimiento de la paridad de género; aunado a los compromisos derivado de los tratados internacionales de los cuales deriva la obligación del Estado Mexicano de llevar a cabo acciones que la hagan efectiva o por las cuales se logre. Aún más, del análisis de las constancias del procedimiento del que derivó el Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil diecinueve, se tiene que el Poder Reformador buscó dar un paso más para el logro de la igualdad sustantiva, ya que es un componente esencial para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres.”

Por ende, como se expuso en párrafos anteriores, el contenido del

artículo tercero transitorio reformado en el decreto 698 es inconstitucional y procede formalizar su declaración por esta autoridad.

En este sentido, el decreto que nos ocupa modificó en forma regresiva los derechos de las mujeres pertenecientes a comunidad indígenas, al desconocer el término que se había previsto para la implementación total de la paridad de género en las elecciones de Ayuntamientos.

Pues como se ha señalado el decreto número 1511, que reformó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en Materia de Paridad, Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género fue resultado de las reformas del catorce de mayo de dos mil diecinueve, que establece la obligatoriedad constitucional de observar el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, este esquema debe ser igual para los estados e integración de ayuntamientos. Cuya reforma pretendía la protección de estos derechos a rango constitucional, buscando armonizar el contenido de la Constitución Federal con los tratados internacionales firmados y ratificados por México, que reconocen la observancia del principio de paridad en la elección de representantes de los municipios con población indígena, además, los municipios deben de conformar sus cabildos bajo el principio de paridad de género, la ciudadanía tiene el derecho de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, así como en los diferentes niveles y

órdenes de gobierno.

Es importante destacar que conforme al marco jurídico y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y EL Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han establecido que está prohibida la regresividad de los derechos humanos, incluidos los político-electorales.

Asimismo, en el criterio jurisprudencial¹, se precisó que los derechos fundamentales tienen una proyección en dos vertientes:

1) Reconociendo la prohibición de regresividad respecto de los derechos humanos, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías.

2) Obligando al Estado a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación.

Ahora, en sentido positivo, del principio de progresividad derivan en el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, el grado de protección de los derechos humanos.

¹ Jurisprudencia 28/2015, cuyo rubro es: “Principio de progresividad. Vertientes en los derechos político-electorales”,

Sirve de sustento a mi agravio, la jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece:

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.”

Conforme a lo anterior, esto para dar cumplimiento de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, **su aplicación debe ser inmediata, y no de manera gradual**, ya que de ser así, transgrediría los principios de equidad de género, progresividad, no regresividad, de manera sistemática, flagrante y directa la participación de las mujeres de ejercer un cargo, como derechos humanos reconocidos en las Constitución es Política de los Estados Unidos Mexicanos e Instrumentos Internacionales.

TERCERO: El contenido del Artículo Transitorio Tercero, del Decreto 698, expedido por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, **vulneró el principio de certeza en materia electoral consagrado en los artículos 41 fracción III y 105 fracción segundo párrafo de la Constitución General de la República**, debido a que incumplió con la obligación para que las leyes electorales federales y locales deban ser promulgadas y publicadas por lo menos noventa (90) días antes de iniciar el proceso electoral en que

vayan a aplicarse además que durante el mismo proceso se realizó modificaciones legales fundamentales que rigen los procesos electorales por sistemas normativos indígenas que actualmente se desarrollan en el Estado de Oaxaca.

El precepto constitucional antes citado establece una prohibición que atiende a dos hipótesis: a) Las leyes electorales federal o locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes del inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse; y b) No podrá haber modificaciones fundamentales en las leyes electorales federal o locales durante el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Por consiguiente, la emisión del decreto 698 emitido por los integrantes del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, el veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós, así como la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el veinticinco de octubre del dos mil veintidós por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca claramente incumplen la norma antes citada y vulneran el principio de certeza en materia electoral, lo anterior tiene verificativo debido a que a la fecha **se desarrolla en el Estado de Oaxaca los Procesos de Elección Ordinaria de concejalías por Ayuntamientos que se rigen electoralmente por sistemas normativos indígenas.**

En este orden de ideas es oportuno mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el principio de certeza en materia electoral consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las reglas fundamentales que

integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, con la seguridad de que previamente tanto los partidos políticos como las minorías parlamentarias, e incluso el procurador general de la República, tengan la oportunidad de inconformarse con las modificaciones legislativas de último momento, las cuales podrían haber trastocado alguno de los derechos que por disposición constitucional asisten a los mencionados institutos políticos, a sus candidatos o a los mismos electores; empero, en su actuación el legislativo y el ejecutivo del estado incumplen el mandamiento constitucional antes citado.

Ahora, si bien es cierto que la expedición y promulgación del decreto se realizó durante el desarrollo de procesos electorales en el Estado de Oaxaca, es importante analizar si la reforma legal que se impugna actualiza el elemento toral para establecer su inconstitucionalidad mismo que se define como la realización de “modificaciones legales fundamentales” que impliquen una clara vulneración al principio constitucional de certeza en materia electoral, por ende sirve conocer la jurisprudencia sustentada por este Tribunal Pleno en la tesis número P./J. 87/2007, visible en la página quinientos sesenta y tres, del Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN “MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES”, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales". En relación con esta expresión, aunque no fue el tema medular, este Alto Tribunal en la tesis P./J. 98/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente. Ahora bien, este Tribunal Constitucional estima pertinente definir claramente el alcance de la expresión "modificaciones legales fundamentales", pues de ello dependerá la determinación sobre si la ley electoral impugnada vulnera o no el precepto citado y, por ende, su inaplicabilidad o no para el proceso que ya hubiere iniciado. Por tanto, una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales. Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores señalados, de forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, la

reforma no tendrá el carácter mencionado.”

Conforme a lo antes citado, es pertinente analizar si la modificación al Artículo Transitorio Tercero del decreto 1511, realizada por la Legislatura actual del Estado de Oaxaca efectuó “modificaciones legales fundamentales” a la norma electoral local, por tanto, corresponde exponer el comparativo del texto anterior y posterior a la reforma, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los que se considera inconstitucional el acto en pugna.

<p>Texto que contenía el Artículo Tercero Transitorio en el Decreto 1511, expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y publicado el treinta de mayo del año dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca:</p>	<p>Texto que contiene el Artículo Tercero Transitorio reformado en el Decreto 698, expedido por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y publicado el veinticinco de octubre del año dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca:</p>
<p><i>Para el cumplimiento de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, respecto de la paridad en sistemas normativos internos o indígenas, esta será gradual, logrando su cabal cumplimiento en el año 2023.</i></p>	<p><i>Para el cumplimiento de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, respecto de la paridad en sistemas normativos internos o indígenas, esta será gradual.</i></p> <p><i>El Instituto Estatal será el responsable de vigilar su cumplimiento y orientar en la integración paritaria de las autoridades electas de acuerdo a las normas internas de cada Municipio hasta alcanzar la paridad entre mujeres y hombres.</i></p>

El Artículo Tercero Transitorio del decreto 1511, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de paridad en los procesos de elección de concejalías por Ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos indígenas, estableció una temporalidad, en este caso determinó el año dos mil veintitrés, para el cumplimiento efectivo de los artículos 15, 24, 32 y 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Con esta determinación el legislador implementó un cumplimiento efectivo del principio de paridad a favor de las mujeres que viven y forman parte de comunidades y pueblos que se rigen por sistemas normativos indígenas o internos, combatiendo con ello la desigualdad histórica y la inaccesibilidad latente en el ejercicio de sus derechos político electorales, luego entonces a partir del día siguiente de su publicación entró en plena vigencia en el Estado de Oaxaca, por lo que el OPLE local exigió su cumplimiento a las distintas autoridades que electoralmente se rigen por sistemas normativos internos o indígenas, acción que ha realizado hasta la actual reforma al precepto en cita.

Sin embargo, el reformado Artículo Tercero Transitorio del decreto 698, eliminó esa temporalidad, prescinde de esta medida implementada por la legislatura anterior para disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a las mujeres gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos político electorales en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social al que pertenecen, en este caso las comunidades que se

rigen por sistemas normativos indígenas o internos.

Para justificar esta reforma, la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba y por ende hace suyo el contenido del Dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Democracia y Participación Ciudadana y de Igualdad de género, emitido con fecha veinte de septiembre del dos mil veintidós, mismo que en su considerando cuarto expone que se justifica la propuesta de reforma toda vez que los legisladores anteriores omitieron considerar el género y la interculturalidad de cada uno de los 417 Ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos indígenas porque cada uno tiene particularidades diferentes, al tiempo que fijaron una temporalidad irreal ni uniforme para el cumplimiento del principio de paridad así como también que las autoridades que se rigen bajo sistemas normativos internos tienen diversos periodos de elección y ejercicio (1, 2 o 3 años) por ese motivo se imposibilita el cumplimiento de la disposición normativa.

En la misma exposición del considerando cuarto, el dictamen reconoce que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) ha realizado un diagnóstico e implementación de acciones con la finalidad de realizar el cumplimiento del contenido del artículo tercero transitorio; empero, no es suficiente para atender la pluralidad de sistemas normativos indígenas, así como también acepta que en el año dos mil veintidós se elegirán autoridades de 415 de 417 Ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos

indígenas en el Estado de Oaxaca y que por ello debe realizarse la gradualidad de la aplicación de paridad sin establecer un plazo específico para su cumplimiento real y efectivo.

Como se advierte, las razones, motivos o circunstancias que motivan la reforma al Artículo Tercero Transitorio no son exhaustivas ni suficientes para justificar el acto, contrario a ello citan de manera genérica la pluralidad de sistemas normativos indígenas como una imposibilidad material para cumplir el principio de paridad en el año 2023, aunado a lo anterior, exponen que debido a que las autoridades que se rigen electoralmente por ese sistema, tienen distintos periodos de ejercicio del cargo (1, 2 o 3 años) instrumentar la paridad efectiva en un plazo de 29 meses a partir de la reforma es insuficiente, sin embargo no citó otro esquema que permita no transgredir o limitar los derechos políticos electorales de las mujeres que viven o son parte de comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas, solo quitan esta garantía sin más, estableciendo que la gradualidad será casuística y el OPLE local se limitara simplemente a pronunciarse de ella, dejando de lado las garantías mínimas para que se preserve el principio de paridad de manera efectiva.

Es oportuno exponer que del estudio del contenido del Dictamen de las Comisiones Legislativas antes expuesto, mismo que fue aprobado por los integrantes de la Legislatura actual, se reconoce que la reforma se realiza durante el desarrollo del Proceso de Elección Ordinaria de concejalías por Ayuntamientos que se rigen electoralmente por sistemas

normativos indígenas; **empero, deciden realizar la misma aun cuando existe la imposibilidad jurídica de realizar la modificación legal debido a que realizarían una *modificación legal fundamental*,** en este caso como se cumpliría el principio de paridad en los procesos electorales que desarrollasen los Ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos internos o indígenas.

La norma que se impugna claramente realizó una modificación legal de carácter fundamental toda vez que tiene por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral que actualmente se desarrolla en los Ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos internos o indígenas una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, como consecuencia a través de la norma que se denuncia inconstitucional se modifica el cumplimiento efectivo del principio de paridad para el año 2023 a favor de las mujeres que viven y son parte de las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos así como eliminan la obligación implementar la paridad efectiva, para las autoridades de los ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos internos y la obligación de las autoridades electorales locales de vigilar el cumplimiento efectivo del principio de paridad en el 2023 y por lo tanto su exigibilidad.

Lo último expuesto, cobra mayor relevancia toda vez que actualmente al IEEPCO se ha exigido el cumplimiento de esta reforma inconstitucional

y la está aplicando en los dictámenes de validación de elecciones por sistemas normativos internos que actualmente se desarrollan en el Estado de Oaxaca.

Expuesto lo anterior, se demuestra la inconstitucionalidad del Artículo Tercero Transitorio reformado en el Decreto 698, expedido por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y publicado el veinticinco de octubre del año dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo que procede su declaratoria formal por esta autoridad, para no afectar los derechos establecidos a favor de las mujeres para el cumplimiento efectivo del principio de paridad en los procesos electorales que desarrollan los sistemas normativos indígenas.

X. Cuestiones relativas a los efectos.

Se hace especial hincapié en que los argumentos vertidos por este partido político, sustentan la inconstitucionalidad de los ordenamientos impugnados, reforma el artículo **TRANSITORIO TERCERO** del decreto numero 1511 expedido el 28 de mayo de 2020 por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 30 de mayo del año 2020; que reformó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en Materia de Paridad, Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género,

estableciendo que refiriendo que omitiendo que su cabal cumplimiento en el año 2023, si no que este será de manera gradual.

En esa virtud, se solicita atentamente que, de ser tildados de inconstitucionales los ordenamientos impugnados, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen:

“ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener: (...)

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; (...)”

“ARTICULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.”

No obstante, lo anterior, para el caso de que esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la

Norma Suprema, en estricto apego al principio *pro persona*, encuentre una interpretación de la norma impugnada que se apegue a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **se solicita emita la correspondiente interpretación conforme al declarar su validez, siempre que confiera mayor protección legal.**

A N E X O S

1. Copia de la constancia de acreditación ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con la que se acredita el cargo de presidenta del Órgano directivo del Partido Político Nueva Alianza Oaxaca.

2. Copia del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca del día 25 de octubre de 2022, que contiene el Decreto por el que se expide la norma impugnada (Anexo dos).

Por lo antes expuesto y fundado, a ustedes, ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente pido:

PRIMERO. Tener por presentada la acción de inconstitucionalidad que promuevo como presidenta del órgano directivo del Partido Político Nueva Alianza Oaxaca.

SEGUNDO. Admitir a trámite la presente demanda de acción de inconstitucionalidad en sus términos.

TERCERO. Tener por designados como delegados y autorizados, a los profesionistas indicados al inicio de este escrito, así como por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos.

CUARTO. Tener por presentados los anexos señalados en el capítulo correspondiente.

QUINTO. En el momento procesal oportuno, declarar fundados los conceptos de invalidez y la inconstitucionalidad e convencionalidad de las disposiciones legales impugnadas.

PROTESTO LO NECESARIO

ANGÉLICA JUÁREZ PÉREZ

PRESIDENTA DEL ÓRGANO DIRECTIVO DEL PARTIDO
POLÍTICO NUEVA ALIANZA OAXACA.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 24 de noviembre de 2022.

019563

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 NOV 25 AM 8 14

OFICINA DE INVESTIGACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido por el buzón judicial el 24 de
noviembre del presente año en 53 folios
con copia simple de constancia de registro
en 3 folios, copia simple de credencial para
votar en 1 folio, diversos anexos en copia
simple sin folios, Impresión de ferrocarril
Oficial del estado de Oaxaca en
2 folios

